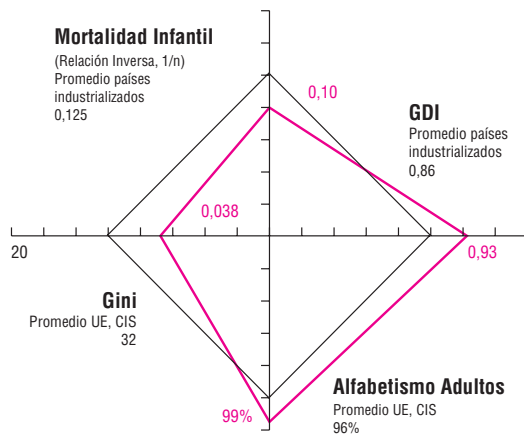


• STEVE SUPPAN



El Diamante de la Equidad: valores nacionales en terracota comparados con los regionales, en azul.

*El Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1997, que es menos estricto que el gobierno estadounidense al definir quién es pobre, calculó que cerca del 19% de unos 50 millones de estadounidenses vive en estado de pobreza. Desafortunadamente, tal voluntad política para la erradicación de la pobreza está ausente en muchas de las actuales políticas del gobierno estadounidense. En rigor, la política fiscal estadounidense sugiere un ánimo discriminatorio contra los pobres. Al perseguir la reducción del déficit del presupuesto federal, el Congreso de este país concentró, durante 1995 y 1996, la mayor parte de las reducciones presupuestales en programas que asistían a la gente pobre.*

## ENTRE RECORTES Y COMPROMISOS

El segundo año de la implementación, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social ha resultado un poco difícil de analizar ya que no se han provisto copias de las presentaciones elevadas a la Comisión para el Desarrollo Sostenido (CDS).<sup>1</sup> De todos modos, la política de desarrollo social, así como su implementación, están siendo acaloradamente debatidas, y se continúa introduciendo nueva legislación social para cambiar esta política y sus presupuestos. Los recortes presupuestales globales y los cambios masivos del decreto de 1996 de «Responsabilidad individual y oportunidad de trabajo» (coloquialmente conocido como *Decreto de Reforma del Bienestar Social*) comienzan a ser implementados. Los gobiernos estatales y locales, así como organizaciones locales gubernamentales y no gubernamentales están luchando para hacer frente a las consecuencias del hecho de que el gobierno federal se quitara de encima la responsabilidad de ser el proveedor principal de asistencia alimenticia, monetaria y médica a la población pobre.

La iniciativa para nuevas sociedades (NPI), un nuevo programa de desarrollo social explícitamente designado para hacer frente a los recortes presupuestales de la ayuda de Estados Unidos a los países del extranjero, continúa siendo implementada en el contexto de una creciente toma de conciencia de las flaquezas de la política exterior estadounidense en lo que respecta a política de desarrollo. Un compendio de la conferencia de 1996 —donde el gobierno federal debatió la futura dirección de toda la política estadounidense en desarrollo social internacional— llegó a la conclusión de que «los participantes reconocieron que la ayuda exterior estadounidense (durante varias de las últimas décadas) ha estado al servicio, principalmente, de fines políticos y en general ha existido escasa prueba de que los programas de ayuda hayan estado efectivamente al servicio de metas de desarrollo económico»<sup>2</sup>

En enero de 1997, la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional (USAID) publicó en dos volúmenes una Guía de Re-

1 Un cambio de personal en el Departamento de Estado, directamente vinculado con el seguimiento de la Cumbre Social, y una insuficiente persistencia para solicitar los mismos son las causas principales de la carencia de documentación de seguimiento a ser analizada.

2 «Perspectives on Foreign Affairs and Structures», Reporte de la Oficina General de Contaduría de Estados Unidos elevado a Comités del Congreso (Washington, DC: GAO/NSAID-96/97, noviembre de 1996) página 11.

cursos para la Iniciativa de Nuevas Sociedades. Esta guía era un informe del Equipo de Aprendizaje del NPI sobre cómo promover «el arte y hábito de asociarse estratégicamente para resolver en forma colectiva problemas atinentes al nivel comunitario.»<sup>3</sup>

El primer volumen resume el marco conceptual del NPI, los instrumentos para medir el fomento de capacidades y su desempeño, así como sus objetivos estratégicos. El segundo volumen detalla lo que la NPI declara haber conseguido en sus objetivos primarios de asociación, las llamadas «Misiones de Avanzada» (Bangladesh, Bulgaria, Guinea, Haití, Kenia, Filipinas, Sri Lanka y Zambia) y los objetivos secundarios de asociación, las «Misiones de Socio» (Ecuador, Indonesia, Madagascar, Panamá, Rumania, Rusia y Sudáfrica).

La meta principal de la NPI es «crear sociedades estratégicas que alienten un desarrollo sostenido entre tres conjuntos de actores clave en el nivel local —la sociedad civil, instituciones de gobiernos democráticos y la comunidad empresarial—» (Vol I, página i). La NPI insiste en enfatizar que sus programas están guiados «por los sistemas rediseñados de administración de la Agencia (USAID) para incrementar el impacto del programa con un costo reducido de éste». Esto está en consonancia con el declive en la asistencia externa de Estados Unidos que ha producido «ansiedad y desesperación» en USAID (Volumen I, páginas iii–iv y 3). Realmente, las Misiones de Avanzada (LEM) son percibidas como el laboratorio para rediseñar experimentos. Por ejemplo, la LEM de Bangladesh es un «País–Laboratorio Experimental de rediseño» (CEL). (Vol. I, página 25).

La Iniciativa de Nuevas Asociaciones realizó pruebas de campo para su esquema conceptual analítico en la Misión de Avanzada de Guinea. En Guinea, uno de los experimentos exitosos involucró una «sociedad estratégica» entre USAID, los Voluntarios para la Asistencia Técnica (VITA, una organización de voluntarios) y PRIDE, una ONG guineana. «La lección más importante que aprendieron USAID, VITA y PRIDE al implementar esta actividad (prestamos de micro-crédito a empresarios guineanos, de los cuales el 70% son mujeres) (II, 27) es la importancia de planificar y administrar la transición de una organización pequeña y personal —que adopta decisiones en base a consenso— a una más grande y altamente estructurada, basada en reglas y procedimientos bien definidos» (II, 27). A través del trabajo de USAID con el Banco Mundial en desarrollo de la agricultura (II, 26), la NPI avizora que una PRIDE más grande, más burocratizada e independiente de los donantes evolucione hacia una nueva clase de unión crediticia. Lecciones como la del experimento de Guinea serán

estudiadas para que la Agencia despliegue con amplitud las Iniciativas de Nueva Asociación.

## LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

A pesar de que la línea principal de los medios de comunicación y los jefes del gobierno describen la economía estadounidense como «robusta», «floreciente» o incluso como «la envidia del mundo», de acuerdo a un análisis realizado por el Bureau de Censo Estadounidense, **el ingreso promedio del 20% de las familias más pobres cayó nuevamente en 1996**. El Centro de Presupuesto y de Prioridades Políticas reportó que «a pesar de una caída en la tasa de desempleo en 1996 y un crecimiento económico real del 2,8 % el año anterior, el número y porcentaje de norteamericanos que viven en la pobreza no declinó en 1996. A un 13,7 %, la tasa de pobreza de 1996 se mantiene por encima de la tasa de 13,1 % de 1989», previo al inicio de la recesión de los primeros años de la década de 1990. De acuerdo a un análisis reciente de los datos del Censo del «Estudio de Luxemburgo sobre ingresos», la disparidad de ingresos entre los individuos pobres y los prósperos era mayor en los Estados Unidos que en cualquiera de los otros 14 países industrializados estudiados.<sup>4</sup>

El Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 1997, que es menos estricto que el gobierno estadounidense al definir quién es pobre, calculó que cerca del 19% de unos 50 millones de estadounidenses vive en estado de pobreza. De acuerdo a este informe, el número de personas que viven en pobreza en este país creció un 3% entre 1974 y 1994, previo al recorte, en el presupuesto federal, de la asistencia monetaria y alimenticia a los pobres. Tomando nota de que la pobreza ha empeorado también en Canadá, Francia, Italia, España y Dinamarca, el informe destaca que «la globalización está lastimando a la gente pobre, no sólo a los países pobres».<sup>5</sup> Sugiere que podrían brindarse servicios sociales básicos e invertir en programas económicos en favor de los pobres con un 0,5% del ingreso mundial total y, de ahí, este reporte concluye que «es el compromiso político y no los recursos financieros el obstáculo real para la erradicación de la pobreza».<sup>6</sup>

Desafortunadamente, tal voluntad política para la erradicación de la pobreza está ausente en muchas de las actuales políticas del

3 NPI Resource Guide: A Strategic Approach to Development Partnering (Washington, DC: Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, junio, 1997) portada. Las referencias subsecuentes a este documento figuran entre paréntesis en el texto por volumen y página. Se puede acceder a este documento a través de la Home Page de USAID: <<http://www.info.usaid.gov>>

4 «Poverty Rate Fails to Decline as Income Growth in 1996 Favors the Affluent», (Washington, DC: Centro de Prioridades Presupuestales y Políticas, octubre 6, 1997), páginas 1–6 y también Jared Bernstein and Lawrence Mishel, «Family Income Up over Past Year, but Still Fails to Regain Pre–Recession Level», (Washington, DC: Instituto de Política Económica, setiembre 29, 1997) páginas 1–2.

5 «UN report shows rise in poverty in U.S.: It says 50 million live below the line» WASHINGTON POST (rpt. STAR TRIBUNE, junio 12, 1997) y también «Globalization is Leaving Many Poor Countries Behind», Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, junio 12, 1997.

6 Andrew Ball, «UN sets \$80 billion as price of ending world poverty» FINANCIAL TIMES, junio 12, 1997.

gobierno estadounidense. En rigor, la política fiscal estadounidense sugiere un ánimo discriminatorio contra los pobres. Al perseguir la reducción del déficit del presupuesto federal, el Congreso de este país concentró, durante 1995 y 1996, la mayor parte de las reducciones presupuestales en programas que asistían a la gente pobre. En los programas federales reglamentarios, que imponen la asistencia a sectores enteros de la población, más del 93% de las reducciones presupuestales vinieron de programas para personas de escaso ingreso. La colocación discrecional de fondos en programas para gente de escasos recursos sufrió recortes presupuestales más pequeños, pero de todos modos desproporcionados.<sup>7</sup>

Debido a los cortes impositivos, que apuntan a beneficiar a los ciudadanos y corporaciones más prósperos, el acuerdo presupuestario firmado por el presidente Clinton en junio de 1997 habrá de tener como resultado mayores déficits presupuestales y algún otro «*round de ajústense los cinturones*», sobre todo para aquellos programas destinados a servir a la gente de magros recursos. Sólo en el año fiscal de 1995, los «respiros» impositivos y los impuestos no recolectados entre corporaciones y gente rica, alcanzaron una cifra que bordea los US\$ 400.000 millones.<sup>8</sup> En tanto los líderes del Congreso anunciaron en 1997 que habrían de cortar las exenciones de impuestos a empresas, es decir los subsidios a los contribuyentes para entidades con fines de lucro, estos recortes no se han experimentado ni asoman en la legislación federal pendiente.<sup>9</sup> Los «ahorros» presupuestales conseguidos con las reducciones en asistencia social se estiman en una cifra cercana a los US\$ 55.000 millones en el período comprendido entre el año 1997 y el año 2002.<sup>10</sup> Un editorialista del Washington Post escribió, con respecto al acuerdo presupuestario, que «*los cortes impositivos lucrativos para aquellos que ya están en buena condición económica son la parte fundamental de este acuerdo; son su fuerza motor... Esto es un mal acuerdo presupuestario – una traición– tanto en términos fiscales como sociales, y es difícil ver cómo puede tener marcha atrás*».<sup>11</sup>

Mientras tanto, a lo largo y ancho del país, organizaciones no gubernamentales, firmas con fines de lucro y gobiernos sub-federales están intentando implementar, aprovecharse de o compensar las cláusulas del Decreto de «Reforma del Bienestar Social» convertido en ley por el presidente Clinton el 13 de agosto de 1996. **En tanto que el número de personas que viven en estado de pobreza no ha decrecido, el número de personas que reciben asistencia monetaria o alimenticia sí ha disminuido drásticamente.** Parte de esta drástica reducción es debida a las estipulaciones del Decreto de Reforma del Bienestar Social, y otra parte se debe a los errores

cometidos por los contratistas empleados para implementar buena parte de este burocráticamente complejo Decreto.

En Milwaukee, Wisconsin, una ciudad de unos 617.000 habitantes, el número de personas en programas de asistencia pública declinó 25% entre mayo de 1996 y mayo de 1997, y cerca de 1.800 personas por mes ya no reciben asistencia. Una parte de las «reformas» de Milwaukee, que fueron llevadas adelante con anterioridad al Decreto de Reforma de Bienestar Social, consistió en privatizar la entrega de asistencia. Un promedio de 4.200 familias –del total de 12.000 familias de la ciudad– enroladas en un programa de trabajo públicamente sustentado, perdieron parte de la asistencia que les correspondía a causa de haber violado las reglas del programa, las cuales requieren ciertas pruebas de que al momento los beneficiarios se encuentran trabajando. De todos modos, a causa de la complejidad de este nuevo sistema y la inexperiencia de las compañías que lo implementan, cerca del 36% de las reducciones en asistencia fueron resultado de errores de las compañías. Si bien el ingreso perdido a causa de estos errores fue finalmente restituido, permanece en pie la tentación, por parte de las compañías, de implementar el nuevo sistema de la forma más estrecha posible para así mejorar la ganancia. En setiembre, Wisconsin se convirtió en el primer estado del país en eliminar la asistencia monetaria a los pobres.<sup>12</sup>

Los congresistas republicanos están iniciando una campaña para eliminar beneficios, como salario mínimo y seguro de salud, para trabajadores que estén en programas sostenidos con fondos públicos. Cortar tales beneficios simplificaría los programas de «beneficios por trabajo», que se han convertido en una pesadilla logística, al punto de que muchos estados están abandonándolos.<sup>13</sup> Allí donde los programas de «beneficio por trabajo» no han sido abandonados, pasantes de estos programas, que ganan menos del salario mínimo, han reemplazado a los trabajadores mal pagos. Por ejemplo en Baltimore, Maryland, 209 aprendices de custodios en escuelas públicas, que ganan tan sólo US\$ 1,50 por hora, han desplazado a los trabajadores contratados, a quienes, de otro modo, una ley de la ciudad hubiera dispuesto que ganaran un «salario de vida», es decir cerca de dos dólares por hora por encima del salario mínimo de US\$ 5,15 la hora. El Instituto de Política Económica estima que el ingreso de al menos 4 millones de receptores de asistencia pública a «beneficio por trabajo» o a empleos con jornales muy bajos, podría deprimir los actuales niveles salariales al menos un 12%.

El estado de Texas está a la procura de propuestas para administrar el sistema de bienestar social para de este modo determi-

7 «*Bearing Most of the Burden: How Deficit Reduction During the 104th Congress Concentrated on Programs for the Poor*» (Washington, DC: Centro de Prioridades Presupuestales y Políticas, diciembre 3, 1996), 1–12: <<http://www.cbpp.org>>

8 David Moberg, «*Class axe*», IN THESE TIMES, febrero 29, 1997, página 14.

9 William Roberts & Stephanie Nall, «*Contesting corporate welfare for trade*», JOURNAL OF COMMERCE, enero 29, 1997.

10 David Super y otros, «*The New Welfare Law*», (Washington, DC: Centro de Prioridades Presupuestales y Políticas, agosto 12, 1996) página 1.

11 «*A Sellout Budget Deal*», THE WASHINGTON POST, Junio 2, 1997.

12 Jason De Parle, «*Cutting Welfare Rolls but Raising Questions*», THE NEW YORK TIMES, mayo 7, 1997 y además «*Welfare, Inc.*», THE NATION, mayo 5, 1997.

13 Christopher Georges, «*GOP Drive to Deny Workfare Benefits Sputters in States*», WALL STREET JOURNAL, octubre 7, 1997.

nar cuáles entre los postulantes califican para la asistencia alimenticia, monetaria y médica, así como para computerizar el sistema de entrega de esta asistencia. Entre las corporaciones transnacionales que han presentado ofertas para el contrato multi-anual de US\$ 2.000 millones se encuentran Lockheed, Electronic Data Systems y Anderson Consulting. Una vez que el contrato sea implementado, es probable que al menos 5.000 empleados del servicio público pierdan su empleo. Si bien también las organizaciones sin fines de lucro están habilitadas para licitar, tanto los requisitos del proceso de licitación como la habilidad de las organizaciones con fines de lucro para contribuir en las campañas políticas (la ley no le permite hacerlo a aquellas sin fines lucrativos) no hacen otra cosa que garantizar que los contratos irán a parar a manos de organizaciones cuyo fin es garantizarse provecho económico. De acuerdo a los directivos del sindicato de empleados públicos, Lockheed envía diariamente de 30 a 40 representantes a cabildear en la legislatura de Texas, y actualmente está dando empleo a siete altos dirigentes del ex gobernador de Texas, George Bush (el hijo del ex presidente de los Estados Unidos), quien es un ferviente propulsor de la privatización. En mayo, el presidente Clinton reguló que Texas no pudiera desembolsar parte de los subsidios federales «bloc»<sup>14</sup> para apoyar a compañías privadas, una regulación que muchos opositores a la privatización estiman que Texas habrá de ignorar. Entretanto, los legisladores federales de Texas y cabildantes enviados por las corporaciones transnacionales están tratando de encontrar una vía para cambiar o evitar esta reglamentación.<sup>15</sup>

A despecho de las cacareadas «eficacias» de la privatización, el registro de los proveedores privados de servicios sociales es bastante pobre. El Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó que los proveedores privados de servicios a los sistemas de apoyo a la infancia no cumplieron con la entrega de servicios en 27 estados. En mayo, un periódico de California reportó que el sistema computerizado de Lockheed para rastrear padres divorciados que adeudan pagos para la crianza de sus hijos, con un costo US\$ 200 millones, estaba «al borde del fracaso».<sup>16</sup>

¿Y qué sucede con los beneficiarios de la reforma del bienestar social? ¿Cómo la están viviendo? El Gobernador de Wisconsin, Tommy Thompson, quien había definido la reducción de beneficiarios de bienestar social como una «historia de éxito asombrosa», afirma que no necesita de ninguna actividad de seguimiento para saber que la reforma ha sido un triunfo. **El mismo Thompson eliminó un programa cuyo fin era monitorear qué sucede con aquellos que ya no reciben beneficios.** El director del Instituto de Empleo y Adiestramiento de la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, afirma que «el estado no quiere saber» qué es lo que sucede con las

personas extirpadas del sistema de bienestar social. El instituto ha intentado reunir datos de seguimiento, pero reconoce que sus esfuerzos han sido insuficientes.<sup>17</sup>

¿Cómo lo están viviendo los ciudadanos de Mississippi, históricamente el estado más pobre (con la más alta incidencia de pobreza y el más bajo promedio anual de beneficios –US\$ 2100 por familia) con la reforma del bienestar social? En los cinco condados más pobres de Mississippi, un investigador estimó que se crearía un nuevo empleo por cada 254 de las familias que perdieron sus beneficios de asistencia monetaria y alimenticia. Con el fin de motivar a los empleadores a que contraten a ex-beneficiarios del sistema de bienestar social, mientras los negocios pagan sólo US\$ 1 la hora (del salario mínimo de US\$ 5,15 por hora), el estado de Mississippi se compromete a pagar el resto durante los primeros seis meses de empleo de cada trabajador. Incluso de este modo, **sólo 15 de los 1269 participantes en un programa de trabajo públicamente subsidiado en un condado consiguieron encontrar y mantener su empleo durante seis meses.** Para explicar los magros resultados que han alcanzado hasta el momento los programas de trabajo, la autoridad a cargo de administrar el sistema de bienestar social de Mississippi, Donald R. Taylor, dijo que el resultado del fracaso de los programas de asistencia del pasado estaba en que «la raíz de los problemas que tenemos reside más en la pobreza como conducta que en la pobreza material».<sup>18</sup>

## INSEGURIDAD ALIMENTICIA Y HAMBRE

En tanto los defensores del Decreto de Reforma del Bienestar Social, incluyendo al presidente Bill Clinton, se apresuran a citar una reducción en el número de beneficiarios de asistencia como prueba de que la legislación es un éxito, el gobierno federal tiene pocos puntos de referencia para medir el impacto de estas reducciones. Tal vez el punto de referencia más notorio sea el primer estudio nacional, realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre inseguridad alimenticia y hambre, que fuera publicado el 15 de setiembre. El Departamento de Agricultura, conjuntamente con los entrevistadores del Bureau de Censo, desarrollaron un cuestionario que en abril de 1995 fue «administrado por los entrevistadores del Bureau de Censo a casi 45.000 hogares, representativos a nivel nacional». El predominio global de la inseguridad alimenticia en Estados Unidos fue estimado en 11,9%, o cerca de 11,94 millones de hogares que comprenden 34 millones de personas. **Se estima que aproximadamente 820.000 hogares, o unas 2 millones de personas, están padeciendo hambre seve-**

14 dólares provenientes de impuestos que el gobierno federal concede a los gobiernos estatales para programas por los cuales el responsable final es el gobierno federal. Los subsidios «bloc» pueden ser reducidos o retirados si los gobiernos de los estados no llevan a cabo los programas de acuerdo con la legislación federal de la cual el subsidio recibe su presupuesto.

15 Adam Fifield, «Corporate Caseworkers», IN THESE TIMES, junio 16, 1997, páginas 14–16.

16 Ibidem

17 Jason DeParle, «Cutting Welfare Rolls but Raising Questions», THE NEW YORK TIMES, mayo 7, 1997 y además «Welfare, Inc.», THE NATION, mayo 5, 1997.

18 Jason DeParle, «Welfare Law Weighs Heavily on Delta, Where Jobs Are Few», THE NEW YORK TIMES, octubre 6, 1997.

ra. Aunque es estado por estado<sup>19</sup> que el estudio del Departamento de Agricultura detalla el grado de inseguridad alimenticia y hambre, debido a los escasas muestras de estudio que se han tomado en algunos estados resultaría dificultoso emplear estos datos como un punto de referencia para juzgar el impacto de los recortes en asistencia alimentaria producidos por la reforma del bienestar social. De todos modos, el estudio sí establece una marca referencial para medir rápidamente el impacto que han tenido, sobre la inseguridad alimenticia y el hambre, los recortes en asistencia alimenticia.

Las organizaciones no-gubernamentales que han intentado paliar los recortes en asistencia alimenticia han declarado su incapacidad para compensar los mismos, a pesar de haber realizado sus mejores esfuerzos y a pesar de las donaciones provenientes del sector privado. Una red alimenticia que comprende 150 bancos de comida, *Second Harvest*, comisionó un estudio a los investigadores de la Universidad de Tufts para medir los impactos, (en los programas de *Second Harvest*), de los recortes en asistencia alimenticia. **Ese estudio estableció que *Second Harvest* debería incrementar su recolección, distribución y preparación de alimentos un 425% para compensar la pérdida de US\$ 271.000 millones en el poder adquisitivo alimenticio habrán de haber provocado, para el año 2002, los recortes presupuestales en asistencia alimentaria.** Actualmente, *Second Harvest* distribuye alrededor de 778 millones de libras de comida por año, con un incremento anual de 5% en libras de alimentos distribuidos.<sup>20</sup> *From the Wholesaler to the Hungry*, uno de los programas típicos de *Second Harvest*, recolecta frutas y vegetales que no han sido vendidos para que sean redistribuidos, entre gente malnutrida, en 52 ciudades estadounidenses. Y *Second Harvest* espera duplicar, para el año 2000, el monto de productos agrícolas redistribuidos.<sup>21</sup>

El 15 y 16 de setiembre, el Departamento de Agricultura, junto con cuatro grupos anti-hambre sin fines de lucro, sostuvo una Cumbre Nacional sobre Recolección y Recuperación de Alimentos. La principal entre las metas de la Cumbre es la de incrementar un 33%, para el año 2000, la recuperación y redistribución de alimentos (provenientes de las cafeterías y granjas de investigación gubernamentales, del Departamento de Defensa y de sociedades público-privadas). Si la Cumbre alcanza su objetivo, cerca de 450.000 personas serán alimentadas cada día.<sup>22</sup> Si las distintas iniciativas de la Cumbre son exitosas, podrían reducir en cerca de un 22% el número de personas que el estudio del Departamento de Agricultura juzga que, diariamente, padecen hambre crónica en Estados Unidos.

El Decreto de Reforma del Bienestar Social apunta a que haya profundos recortes en todo tipo de asistencia a los inmigrantes

legales. Sin embargo, los gobiernos estatales han restablecido parcialmente algunas formas de asistencia, incluyendo a 13 de los 50 estados que habrán de estar proveyendo alguna asistencia a los inmigrantes legales para que compren comida. Por ejemplo, el 23 de octubre, el estado de Illinois anunció que habría de proveer US\$ 4,7 millones para asistencia alimenticia en 1998 y que gastaría US\$ 5,3 millones para ayudar a que los inmigrantes legales se conviertan en ciudadanos estadounidenses.<sup>23</sup>

### HACIA UNA REFORMA DE LA «REFORMA»

En la Cámara de Representantes ha sido introducida legislación federal para restablecer asistencia federal en alimentos cortada por el Decreto de Reforma del Bienestar Social. Los 80 copatrocinadores del proyecto de ley «*El Hambre Tiene Cura*» enviaron una carta al presidente Clinton, en octubre. En ella urgieron la restauración de lo que ha sido recortado de muchos programas de asistencia alimenticia y se opusieron a la privatización de las estampillas de alimentos y otros sistemas de entrega de asistencia.<sup>24</sup> De todos modos, dicha restauración de lo recortado al presupuesto entraría en conflicto con las prioridades del portavoz del Congreso, Newt Gingrich, anunciadas el 23 de octubre al Comité de Presupuesto del Congreso: «*reducir la deuda nacional acumulada de US\$ 5,5 billones*<sup>25</sup>, *proveer cortes anuales en impuestos, aumentar el gasto en ciencia y tecnología, y acometer una concentración masiva en lo relativo a defensa para asegurar la continuidad de la supremacía estadounidense*».<sup>26</sup>

Dadas las prioridades del portavoz Gingrich, no da la impresión de que el Congreso vaya a presupuestar rápidamente una legislación que mejore las vidas de los pobres y hambrientos en Estados Unidos. La capacidad del gobierno estadounidense para llevar adelante compromisos de desarrollo social, a nivel nacional e internacional, se ve obstaculizada por las prioridades de recorte presupuestal que tienen las autoridades federales y los patrones empresariales.<sup>27</sup> Asimismo, en el futuro cercano parece bastante endeble el potencial que hayan de desplegar los programas estadounidenses de ayuda exterior como las Iniciativas de Nueva Sociedad.

- IATP Institute for Agriculture and Trade Policy

19 «*Special Analysis: USDA Hunger Data*», FOOD RESEARCH AND ACTION CENTER, setiembre, 1997.

20 María Douglas Reeve, «*Study: Food stamp end bodes ills for the hungry*», ST. PAUL PIONEER PRESS, julio 18, 1997.

21 Jody Shee, «*Food bank redirects produce*», THE PACKER, octubre 13, 1997.

22 «*National Summit on Gleaning and Food Recovery Announcements and Accomplishments*», Washington, DC: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, suelto de prensa N° 0315.97.

23 Suelto de prensa de la oficina del gobernador Jim Edgar, Estado de Illinois, octubre 23, 1997.

24 «*Hunger Has a Cure Sponsors Weighing In*», Federal Nutrition Programs Update, Food Research and Action Center, octubre 25, 1997.

25 En inglés «trillions», es decir, «1000 billion» (en castellano, 1.000 millardos) Son 5.500.000.000.000.

26 Eric Pianin, «*Gingrich Has Presumptive Plan for Budget Surpluses*», WASHINGTON POST, octubre 24, 1997.

27 Se trata de los empresarios que en E.E.U.U. financian las campañas y partidos políticos.